



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE PUEBLA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
DE LA CIUDADANÍA.

EXPEDIENTE: TEEP-JDC-016/2022

PARTE ACTORA: MÓNICA SILVA RUÍZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y
DENUNCIAS DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA.

MAGISTRADA PONENTE: IDAMIS
PASTOR BETANCOURT

SECRETARIA INSTRUCTORA: ISABEL
CARREÓN PONCE DE LEÓN

Heroica Puebla de Zaragoza, a veintitrés de febrero dos mil veintitrés¹.

VISTOS, para resolver los autos del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía al rubro indicado, promovido por Mónica Silva Ruíz, por su propio derecho, para controvertir la resolución emitida el veintiséis de enero, por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Puebla, mediante la cual desechó la denuncia del expediente identificado con la clave SE/PES/MSR/033/2022.

RESULTANDO:

I. Glosario². Para efectos del presente fallo se entenderá por:

Acto impugnado, resolución impugnada:	La resolución emitida el veintiséis de enero por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado, dentro del expediente SE/PES/MSR/033/2022
---------------------------------------	---

¹ Las fechas en la presente sentencia se entenderá que corresponden al año en curso, salvo mención expresa al respecto.

² Catálogo de expresiones o palabras abreviadas que se utilizan en la presente sentencia.

Comisión, autoridad responsable:	Comisión y Denuncias del Instituto Electoral del estado de Puebla.
Código Local, Código de la materia, CIPEEP, Código Electoral Local, Código Comicial:	Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.
Constitución Federal:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Local:	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Denunciado:	Cirilo Calderón
IEE, Instituto, autoridad electoral:	Instituto Electoral del estado de Puebla.
Parte actora, accionante, impugnante, incoante, promovente:	Mónica Silva Ruíz.
Tribunal, Tribunal Electoral, Tribunal Local, Organismo Jurisdiccional:	Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

II. Antecedentes³

Contexto.

a) **Recepción de la Denuncia.** El veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós la Oficialía de Partes del Instituto recibió el escrito de denuncia presentado por la ahora actora.

b) **Acuerdo de Radicación.** El veinticinco de noviembre del dos mil veintidós, la Encargada del Despacho de la Dirección Jurídica, ordenó registrar el presente expediente con la clave SE/PES/MSR/033/2022, en el cual se ordenó el ejercicio de la fe pública para revisar dos enlaces denunciados, reservar la admisión y emplazamiento y el dictado de las medidas cautelares y de protección.

³ De los escritos de demanda y de las constancias que obran en autos del expediente al rubro indicado, se desprenden los siguientes hechos.



c) **Resolución impugnada.** El veintiséis de enero, la Comisión Responsable ordenó desechar la denuncia presentada por la incoante, toda vez que a su juicio se advirtió una causal de desechamiento establecida en el artículo 416 inciso b) del Código Local.

Trámite ante este Tribunal Electoral Local.

d) **Juicio de la Ciudadanía.** Inconforme con lo anterior, a las trece horas con nueve minutos del dos de febrero, fue presentado ante la Oficialía de Partes del IEE, escrito de demanda de Juicio de la Ciudadanía dirigido a este Tribunal Electoral con finalidad de controvertir la resolución mencionada en el punto inmediato anterior.

e) **Remisión a este Tribunal.** Realizado el trámite de ley, el ocho de febrero, se tuvo por recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el Juicio de la Ciudadanía promovido por la parte actora, así como las constancias que lo acompañan.

f) **Turno.** El nueve de febrero, la Magistrada Presidenta de este Organismo Jurisdiccional ordenó la integración del expediente, asignándole la clave TEEP-JDC-016/2023 conforme al libro de gobierno y a su vez, lo turnó a la ponencia a su cargo, para su estudio y resolución.

g) **Radicación.** Mediante proveído diecisiete de febrero, la Magistrada Ponente tuvo por turnado el expediente, ordenó su radicación; y reservó acordar sobre la admisión y cierre de instrucción.

h) **Admisión y cierre de instrucción.** En su oportunidad la Magistrada Instructora, acordó admitir y cerrar instrucción, con lo cual, ordenó que el medio de impugnación pase a sentencia.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción II del artículo 373 y 374 del Código Electoral Local, se determinó sesionar en esta fecha para resolver el presente Juicio de la Ciudadanía.

PRIMERO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

Este Tribunal Electoral, ejerce jurisdicción y es competente para conocer y resolver el presente asunto, ello con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 fracción IV de la Constitución Federal; 3 fracción IV de la Constitución Local; 1 fracciones V y VII, 3, 8, 325, 338 fracción III, 340 fracción II, 353 Bis y 354 párrafo segundo del CIPEEP; 11, fracción IV, 14, fracciones VII y XIX, y 18 fracción II, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

En el caso concreto, este Tribunal Electoral es competente para conocer del presente asunto, al ser promovido por una ciudadana por su propio derecho y en su calidad de denunciante dentro de un procedimiento especial sancionador, para controvertir la resolución mediante la cual la Comisión Responsable desechó la queja radicada con el expediente SE/PES/MSR/033/2022 en el que se denunciaron la comisión de posibles actos de Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género, mismos que pueden ser violatorios de las reglas establecidas en la normativa electoral; supuesto que se encuentra contenido en el artículo 353 Bis del CIPEEP, el cual prevé la existencia del Juicio para Protección de los Derechos-Político Electorales de la Ciudadanía, para controvertir dichos actos de autoridad.

SEGUNDO. PROCEDENCIA Y EXHAUSTIVIDAD.

Al haber realizado un análisis exhaustivo de las constancias que integran el expediente al rubro citado, este Tribunal Electoral Local no advierte la actualización de alguna causal de improcedencia o sobreseimiento de las previstas en el contenido de los artículos 369 y 372 del Código Comicial.

Por otro lado, este Organismo Jurisdiccional estudiará minuciosamente todas y cada una de las constancias que integran el expediente, a fin de cumplir con el principio de exhaustividad que rige en materia electoral y que obliga a este Tribunal a analizarlas en forma



integral, lo anterior en acatamiento a lo dispuesto en las jurisprudencias 12/2001 y 43/2002 sustentadas por la Sala Superior, de rubros: **"PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN"**²⁴ y **"EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE"**.²⁵

En el entendido de que, además se analizará integralmente el escrito de demanda, toda vez que los agravios se pueden desprender de cualquiera de sus partes, lo anterior, encuentra sustento en el criterio contenido en la jurisprudencia **02/98**, sustentada por la Sala Superior, de rubro: **"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL"**.²⁶

Por otro lado, este Organismo Colegiado, se avocará al estudio de los agravios expuestos, realizando un examen en conjunto, atendiendo a la estrecha vinculación que pudieran guardar entre sí, o bien por separado, ya sea en el propio orden en que se hayan planteado o en orden diverso, según amerite el caso; sin que esta metodología les cause lesión, dado que es de explorado derecho que no es la forma como se estudian los agravios lo que puede originar una lesión.

Al efecto resulta aplicable la jurisprudencia número **04/2000**⁷, que al rubro dice: **"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN."**

TERCERO. MEDIOS DE PRUEBA Y SU VALORACIÓN.

I. PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA:

⁴ Visible en la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral. Suplemento 6, Año 2003, página 51.

⁵ Visible en la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral. Suplemento 5, Año 2002, páginas 16 y 17.

⁶ Consultable en: Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo: Jurisprudencia, páginas 22-23.

⁷ Consultable en: "Justicia Electoral". Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6.

*“1. **DOCUMENTAL PÚBLICA.** Consistentes en copia simple de la “RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, POR LA CUAL SE DESECHA LA DENUNCIA FORMULADA POR LA CIUDADANA MONICA SILVA RUIZ, EN SU CARÁCTER DE DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO XII CON CABECERA EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, DENTRO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON LA CLAVE SE/PES/MSR/033/2022.”, la cual deberá ser remitida por la responsable en copia certificada.*

*2. **DOCUMENTAL PRIVADA.** Consistente en copia simple de la DENUNCIA presentada por el suscrito en fecha veinticuatro de noviembre del 2022.*

*3. **LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA,** en todo lo que favorezca a la suscrita en el presente medio de impugnación y que se relacione con los hechos que originaron el mismo.*

*4. **INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES,** de todo lo que se desprenda de las actuaciones en el presente expediente y que favorezcan a la suscrita en el presente medio de impugnación y que se relacione con los hechos que lo originaron.”*

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 358, fracción II, y 359 párrafo segundo, del CIPEEP, se tiene por admitida la prueba enlistada con el numeral 2, clasificándola como **documental privada**, con valor probatorio presuncional.

Respecto a las identificadas como 3 y 4, se tiene por ofrecida la **presuncional legal y humana, así como la instrumental de actuaciones**, consistiendo la primera en la consecuencia que la ley o este Tribunal deducen de un hecho conocido o debidamente probado, para averiguar la verdad de otro desconocido; prueba tendente a



demostrar la procedencia o no de los agravios formulados por el accionante, y la segunda en las actuaciones y constancias que obran en el presente expediente. En esos términos, se tienen por admitidas y valoradas con fundamento en los artículos 358, fracción IV del Código de la materia.

Finalmente, la señalada con el punto 1 al no ser remitida por la actora junto con su escrito de demanda, así como al no justificar que la solicitó oportunamente y no le fue otorgada, con fundamento en los artículos 356, 357, segundo párrafo, y 361, fracción IV, del CIPEEP, se tiene por no admitida.

II. AUTORIDAD RESPONSABLE

1. Copias certificadas por el Secretario Ejecutivo del IEE, de todas las constancias que integran el expediente del procedimiento especial sancionador identificado con clave alfanumérica **SE/PES/MSR/033/2022**.

La anterior prueba constituye una documental pública con pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 358, fracción I, inciso a) y 359, primer párrafo del CIPEEP.

CUARTO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS, PRETENSIÓN Y LITIS.

De la lectura del Juicio de la Ciudadanía promovido por la parte actora se desprende lo siguiente.

I. Agravios: Mismos que fueron señalados por la promovente de la siguiente manera.

1. Omisión de imponerse sobre la solicitud de medidas cautelares solicitadas.
2. Indebido desechamiento.
3. Análisis con perspectiva de género.

I. **Informe circunstanciado:** La autoridad señalada como responsable considera que la resolución controvertida se emitió en estricto cumplimiento y respeto a los principios rectores de la función electoral, así como también observando la perspectiva de género.

De igual forma que, con la finalidad de reunir mayores elementos que pudieran establecer la existencia de los hechos, se solicitó a la Oficialía Electoral la verificación de existencia y contenido de dos enlaces electrónicos aportados por la denunciante.

Por otra parte, respecto a las medidas cautelares, refiere que si bien no existió pronunciamiento alguno, ello obedece a que determinó la improcedencia de la denuncia.

Finalmente, la autoridad responsable solicita se deseche el Juicio de la Ciudadanía presentado por la parte actora.

II. **Pretensión:** De los agravios manifestados por la parte actora, se desprende que su pretensión radica en que este Tribunal le conceda la razón y, en consecuencia, se revoque la resolución dictada por la Comisión Responsable, a efecto de que continúe con la sustanciación de su denuncia.

III. Por consiguiente, la litis en el presente asunto se centra en dilucidar si la determinación de la Comisión fue o no conforme a derecho.

ESTUDIO DE FONDO

QUINTO. ANÁLISIS DEL CASO.

Por cuestión de orden y método, **este Tribunal estudiara de manera conjunta los agravios manifestados por la promovente**, sin que



ello le ocasione perjuicio alguno, pues no es la forma sino la omisión de análisis lo que podría provocarle una vulneración a sus derechos.

Marco normativo.

La Constitución Federal en su artículo 14 señala que nadie podrá ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Por su parte, el artículo 16 del mismo ordenamiento establece una garantía de seguridad jurídica fundamental para los gobernados al establecer que: *"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento"*.

Así, el diverso 17 de la Constitución fija que toda persona tiene derecho a que le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

De lo anterior se advierte que las autoridades en atención al derecho de acceso a la justicia tienen la obligación de emitir sentencias o resoluciones en las que se funde y motive, tal y como lo establece la Constitución Federal y las normas aplicables en cada caso concreto.

De esta forma, la fundamentación implica la expresión del precepto legal aplicable al caso, esto es, la obligación de la autoridad emisora del acto, de citar los preceptos legales y normativos, en que se apoya la determinación adoptada.

Por su parte, la motivación radica en la necesidad de señalar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas

que se hayan considerado para la emisión del acto, es decir, la manifestación de los razonamientos sobre el por qué consideró que el caso concreto se adecua a la hipótesis normativa.

En ese sentido, toda autoridad, ya sea administrativa o jurisdiccional, tiene la obligación de señalar los preceptos legales y los motivos por los cuales considera que su decisión se encuentra apegada a derecho.

Por otro lado, en relación con los procedimientos sancionadores, el artículo 386 del CIPEEP, señala que se clasifican en dos tipos, siendo uno de ellos, los especiales sancionadores, que son los que se instauran y resuelven de manera expedita por faltas cometidas dentro de los procesos electorales.

En ese orden de ideas, en los diversos 410, 412, 413 y 415 del Código de la materia, en lo que interesa, se establece que:

- El Secretario Ejecutivo del IEE, instruirá el procedimiento especial, cuando se denuncie la comisión de -entre otras conductas- **aquellas relacionadas con violencia política contra las mujeres en razón de género**.
- La denuncia será desechada de plano por el Secretario Ejecutivo, sin prevención alguna cuando los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de propaganda político-electoral; el denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos; y la denuncia sea evidentemente frívola.
- El Secretario Ejecutivo deberá admitir o desechar la denuncia en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a su recepción. En caso de desechamiento notificará al denunciado su resolución, por el medio más expedito a su alcance dentro del plazo de doce horas.



- En los procedimientos relacionados con violencia política, la Secretaría Ejecutiva ordenará en forma sucesiva iniciar el procedimiento, así como resolver sobre las medidas cautelares y de protección que fueran necesarias.
- Cuando el Secretario Ejecutivo admita la denuncia, emplazará al denunciante y al denunciado para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión.
- Celebrada la audiencia, el Secretario Ejecutivo deberá turnar de forma inmediata el expediente completo, exponiendo en su caso, las medidas cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a cabo, al Tribunal, así como un informe circunstanciado.

De las líneas anteriores, se puede concluir que, el Secretario Ejecutivo del IEE, tiene la facultad desechar las denuncias siempre que se actualice algunas de los supuestos mencionados, o admitirlas para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes y una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, remitirlo a este Tribunal para que conozca del fondo de la controversia planteada.

Juzgar con perspectiva de género.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, comparten el criterio relativo a que la impartición de justicia con perspectiva de género consiste en una aproximación de análisis de los casos considerando las situaciones de desventaja, de violencia, o de discriminación o vulnerabilidad por razones de género, cuestionando los posibles estereotipos de género y evitando invisibilizar las violaciones alegadas.

En ese sentido, la atención de la violencia contra las mujeres debe procurarse tanto por las autoridades electorales como por los partidos

políticos, lo cual exige un actuar responsable y efectivo de los poderes públicos, pero también de los partidos políticos, quienes tienen el deber de contribuir a revertir y transformar las relaciones tradicionales de dominación entre hombres y mujeres y la perpetuación de estereotipos que fomenten la discriminación.

Así, es de explorado derecho que la legislación del estado mexicano, define a la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.

Por su parte, la violencia política en razón de género se manifiesta, entre otras hipótesis, por obstaculizar a las mujeres los derechos de asociación o afiliación política, y ocultarles información con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades.

Así, en la Jurisprudencia 48/2016 de rubro **“VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES”**, de la Sala Superior, establece que las autoridades electorales en general **están obligadas a evitar la afectación de derechos políticos electorales y deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso.**

La Jurisprudencia citada, plantea que la violencia política contra las mujeres en razón de género, consiste en *“todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”*.

Así, como una conclusión previa, este Tribunal Electoral local, hace referencia a este andamiaje jurídico, para poner en evidencia que



cualquier autoridad, en cumplimiento a las obligaciones generales establecidas en el párrafo tercero del artículo 1 del Pacto Federal (promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos), tiene el deber de atender con la debida diligencia cualquier afectación diferenciada que, por su condición de mujer, generen los actos de violencia concernientes a la participación de las mujeres.

En este sentido, los Tribunales Electorales y autoridades administrativas electorales, tenemos la obligación de atender este tipo de planteamientos juzgando con perspectiva de género y atendiendo al contexto de esta problemática, especialmente cuando se trata de cuestiones como la violencia política en razón de género.

Por otra parte, en el año dos mil quince, la *Suprema Corte* emitió el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género,⁸ del cual se destaca lo siguiente:

B. ¿Cuándo y Quiénes Deben Juzgar con perspectiva de Género?

Hacer realidad el derecho a la igualdad es un mandato derivado de la Constitución y de los instrumentos internacionales que atañe a toda persona que aplica derecho, por ello, todos y todas las impartidoras de justicia tienen el deber de juzgar con perspectiva de género. La perspectiva de género es un método que debe ser aplicado aun y cuando las partes involucradas en el caso no la hayan contemplado en sus alegaciones. (Énfasis añadido)

En consonancia con la postura marcada en el citado Protocolo, la Suprema Corte ha emitido los siguientes criterios:⁹

Tesis: P. XX/2015 (10a.)

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA.

Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.)

⁸ Consultable en el sitio: https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/Protocolo_perspectiva_de_genero_REVDIC2015.pdf Pág. 77

⁹ La Sala Superior ha reconocido la vigencia de los criterios emitidos por la *Suprema Corte*, como parámetros del juzgamiento con perspectiva de género. Véase, por ejemplo, las sentencias dictadas en los juicios: SUP-JDC-383/2018, SUP-JDC-1172/2017 Y ACUMULADOS, entre otras.

ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

Tesis: 1a. XXVIII/2017 (10a.)

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN.

En síntesis, de los criterios jurisprudenciales, se puede concluir que juzgar con perspectiva de género, implica la necesidad de detectar en cada caso, sometido a juzgamiento, posibles situaciones de desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, **así como de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación, y finalmente resolver los casos prescindiendo de cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en detrimento de la igualdad sustantiva.**

Caso concreto y decisión.

Sentado lo anterior, es importante señalar que, la denuncia que la parte actora estima fue indebidamente desechada, versa sobre la posible comisión de Violencia Política en razón de Género en contra de la ahora promovente por parte de Cirilo Calderón a través de dos notas periodísticas publicadas en el periódico digital *“Hipócrita Lector Los tiempos de telenovela poblana”*.

Al respecto, la denunciante en el procedimiento sancionador ofreció como material probatorio tres ligas electrónicas relativas a las notas denunciadas, así como copia simple de las mismas, solicitando su verificación por la Oficialía Electoral, y que, en su momento, la autoridad administrativa dictara las medidas cautelares y de protección respectivas.

Dicho lo anterior, la parte actora manifiesta en su Juicio de la Ciudadanía lo siguiente:



1. Omisión de imponerse sobre la solicitud de medidas cautelares solicitadas.

Refiere que, la responsable determinó desechar la queja sin imponerse o haber resuelto previamente respecto de la solicitud de medidas cautelares, violentando con dicho actuar, la naturaleza de las mismas, así como lo señalado en el artículo 416 del CIPEEP. De igual forma, violentó la protección progresiva del derecho a la tutela judicial efectiva y el deber de prevenir violaciones a los derechos humanos.

2. Indebido desechamiento.

Al respecto, manifiesta que la responsable debió ejercer sus facultades de investigación, para contar con elementos suficientes respecto a la conducta denunciada y a la postre determinar sobre su procedencia.

También realizó un análisis de fondo para sustentar su desechamiento, valorando las pruebas y analizando el contenido de la nota periodística denunciada.

3. Análisis con perspectiva de género.

En la resolución controvertida, la responsable no tomó en cuenta que la perspectiva de género debe aplicarse en todos los casos que involucren posibles relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotipados, con la finalidad de detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo de “mujeres” u “hombres”.

Ahora bien, es de conocimiento de este Tribunal que, cuando se presenta una queja ante la autoridad administrativa, esta tiene la obligación de verificar si reúne los requisitos de procedencia establecidos en el CIPEEP y demás reglamentos aplicables, así como

de llevar a cabo un análisis preliminar, con la finalidad de apreciar si de los hechos denunciados se podría actualizar una infracción en materia electoral para ser admitida o en caso contrario desecharla.

Ello significa que, previo a que a la comisión responsable deseché o admita una queja, deberá analizar si es posible que se configure una posible vulneración a la normativa electoral, en el caso concreto, Violencia Política en razón de Género.

Bajo esa tesitura, el análisis preliminar implica que, **de los hechos expuestos en la queja, así como de las constancias que obran en el expediente, se advierta de forma clara, manifiesta, notoria e indudable una posible vulneración o no en la materia.**

Robustece lo anterior, la jurisprudencia 45/2016¹⁰, de la Sala Superior, de rubro: “**QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL**”.

Al respecto, dentro de los autos que integran el procedimiento sancionador es posible desprender que, la autoridad administrativa únicamente realizó el acta con clave ACTA/OE-226/2022 de verificación de existencia y contenido de la nota periodística aportada por la denunciante, misma que consideró suficiente para emitir la resolución que ahora se controvierte.

En ese sentido, en la resolución impugnada se establecieron, en lo que interesa, los siguientes argumentos:

¹⁰ Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 35 y 36.



En consecuencia, de lo anterior, es de suma importancia analizar el contenido de los enlaces electrónicos ofrecidos por la ahora denunciante, de los cuales, lo que nos interesa en el presente caso, es el contenido siguiente:

- De enlace <https://hipocritalelector.com/machetitos/la-desgracia-de-hector-sanchez/> se advierte una nota periodística intitulada como: **"La desgracia de Héctor Sánchez"**. **"El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, vivió la semana pasada una de las peores etapas de su carrera política que lo dejó fuera del grupo de aspirantes a la gubernatura de Puebla."** Y por lo que respecta a la C. Mónica Silva, menciona lo siguiente:
" ...El asunto se complica todavía más porque Sánchez Sánchez también se llevó entre los pies a su esposa, la diputada local **Mónica Silva, una de las principales impulsoras de la recién aprobada tipificación de la violencia vicaria en Puebla...**
" ... el mandatario estatal envió un durísimo mensaje al magistrado: Los otros poderes diferentes al Ejecutivo no puede seguir siendo centro de protección de privilegios. Errores cometidos por Héctor Sánchez solo llevan a un camino: la muerte política."



ESPACIO SIN TEXTO



SE/PE/MSR/033/2022

- Del enlace <https://hipodotialector.com/machete/sanchez-sanchez-la-imposible-placabilidad/> se advierte una nota periodística intitulada como: "Héctor Sánchez y la imposible placabilidad". Cuando se pensaba que la caída de Héctor Sánchez no podía ser peor, apareció un nuevo indicio de desventura. ¿El magistrado es protagonista de una trama como se victimizó en Twitter? La respuesta lisa y llana es no. Y por lo que respecta a la C. Mónica Silva Ruiz, menciona lo siguiente: "...Y, hay que decirlo con todas sus letras, su esposa Mónica Silva Ruiz tampoco ayudó para que el magistrado saliera bien librado...". La diputada local del PT se sumó a través de una campaña cizañosa en la acusaba al gobernador de traicionar la amistad que tenían con el matrimonio y que era responsable de crear las condiciones para que Sánchez Sánchez fuera defenestrado "...Y, Héctor Sánchez todavía no había ofrecido una explicación de los irregulandados financieros y su esposa repartía culpas a diestra y siniestra". "Eso fue el último clavo al ataúd del galicista. A la par, la entrega-recepción en el Poder Judicial sacó a flote un sinfín de irregularidades en el manejo financiero del TSJ y destapó la cloaca."

De dicha Acta se advierte, que el contexto general de las publicaciones, está relacionado y enfocado a los asuntos que son injerencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y de su entonces presidente Héctor Sánchez, por lo que de dichas notas periodísticas no se advierte de ningún modo el menoscabo al ejercicio del cargo de la denunciante como Diputado Local derivado de su condición de ser mujer, aunado que de las notas periodísticas son publicadas en total apego a la libertad de expresión y de información consagrado en el artículo 6 de la Constitución Federal y que puede incluso considerarse un tema de interés general para los ciudadanos del estado de Puebla.

Es decir, la nota periodística denunciada se circunscribe a señalar diversas situaciones y acontecimientos de interés general relacionados con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y de su entonces presidente Héctor Sánchez Sánchez, sin que del análisis integral de las notas se advierta que con estas pudieran aún de forma indiciaria, tener como consecuencia el menoscabo o el anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de su derecho político-electoral en su cargo como Diputado Local, solo por el hecho de ser mujer. Y menos aún que con ello se ponga en riesgo su integridad física y mental y la de sus familiares como lo pretende señalar la quejosa.

Ya que como fue señalando con anterioridad las notas periodísticas denunciadas se abocan o enfatizan en el tema del TSJ y su entonces presidente, sin denotar



**TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE PUEBLA**

TEEP-JDC-016/2023



SE/PES/MSR/033/2022

la función de la denunciante como Diputada Local, ni vulnerando su derecho político-electoral a ejercer su cargo por el hecho de ser mujer. Sin embargo, si se puede inferir que a través de la nota periodística denunciada se está ante un ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión y de información general a los ciudadanos.

En consecuencia y por lo anteriormente expuesto, es que esta Comisión Permanente, no advierte elementos, aun de forma indiciaria, de una probable violación a la normativa electoral en la vertiente de Violencia Política de Género, actualizándose en consecuencia lo establecido por el artículo 416 párrafo sexto inciso b) del Código Comicial Local.

CUARTO. Efectos de la Resolución. En consecuencia y en atención a los razonamientos expuestos en el Considerando que antecede, se determina que los actos puestos de conocimiento a este órgano administrativo electoral, no se aprecian como violatorios de la normativa electoral al no estar catalogados como actos de Violencia Política por Razones de Género; esta Comisión Permanente considera decretar la improcedencia del escrito signado por la C. Mónica Silva Ruiz de conformidad con lo establecido por el artículo 416 párrafo sexto inciso b) de Código Comicial Local

De lo anterior, es posible desprender que la Comisión responsable se limitó a afirmar que del análisis de la publicación denunciada no era posible advertir un menoscabo al ejercicio del cargo de la Diputada Local derivado de su condición de mujer, y que la misma era emitida en apego a la libertad de expresión del denunciado.

Al respecto, debe decirse que las autoridades electorales están obligadas a hacer efectivos los principios de igualdad y no discriminación, y en específico, la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Lo cual exige un actuar responsable y efectivo de los poderes públicos, quienes tienen el deber de contribuir a revertir y transformar las relaciones tradicionales de dominación entre hombres y mujeres y la perpetuación de estereotipos que fomenten la discriminación.

Por su parte, la Corte Interamericana ha establecido que cuando existen alegaciones de violencia política de género que impiden el

adecuado ejercicio de un cargo, se debe actuar con debida diligencia.¹¹

De igual manera, la SCJN ha establecido que la obligación de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres y la no discriminación, así como garantizar el acceso a mecanismos judiciales y efectivos para combatirlos, no sólo corresponde al agente encargado de la investigación, sino que **crea obligaciones a todas las autoridades**.

Bajo ese tenor, la misma Sala Superior ha señalado que la valoración de las pruebas en casos de violencia política de género aplica la **reversión de la carga de la prueba**, que no se traslade a las víctimas la responsabilidad de aportar lo necesario para probar los hechos, para impedir que se dicten resoluciones carentes de consideraciones de género, **lo cual obstaculiza, el acceso de las mujeres víctimas a la justicia** y la visión libre de estigmas respecto de las mujeres que se atreven a denunciar.¹²

Conforme a las anteriores ideas, es que este Tribunal considera que le asiste la razón a la parte actora, respecto a la que la autoridad responsable no emitió una resolución con base en una perspectiva de género, basando únicamente en las notas periodísticas que había aportado como prueba de la conducta denunciada.

Aunado a que perdió de vista el resto de elementos que tenía a su alcance, como lo son los hechos narrados por la denunciante, con la finalidad de emitir una determinación apegada a derecho con base en una perspectiva de género dado el asunto que se sometió a su consideración.

Por otra parte, también debe mencionarse que, existe una amplia construcción jurisprudencial en la materia electoral, en la que se ha

¹¹ Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez*, sentencia del 29 de julio de 1988, serie C No. 4, párr. 166.

¹² SUP-REC-91/2020



sostenido que, en los procedimientos sancionadores, el quejoso o quejosa únicamente tiene la carga de presentar pruebas o indicios que evidencien la posible existencia de una falta o infracción y es, a partir de esos elementos, que el órgano competente tiene la obligación de realizar las investigaciones necesarias, para el esclarecimiento de los hechos.¹³

Sustentan lo anterior, la tesis relevante CXVI/2002, bajo el rubro: “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LOS HECHOS DENUNCIADOS SÓLO SON LA BASE DEL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN”; y en la Jurisprudencia 16/2004 de rubro: “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE TIENE FACULTADES INVESTIGADORAS Y DEBE EJERCERLAS CUANDO EXISTAN INDICIOS DE POSIBLES FALTAS”.

Los señalados criterios resultan aplicables, toda vez que la materia de la denuncia es sobre posibles actos de Violencia Política en razón de Género, por lo que, la responsable debía realizar mayores diligencias con la finalidad de establecer si la denunciante no se encontraba en una situación de desventaja o menoscabo a sus derechos político-electorales por su condición de mujer.

Por tanto, no bastaba con que la autoridad administrativa electoral desahogara los enlaces electrónicos aportados por la ahora actora, sino que debía continuar con la investigación respectiva para dilucidar la conducta denunciada.

Por estos motivos, es que este Tribunal considera **FUNDADOS** los agravios relativos a que la responsable desecho indebidamente la queja, así como que, no juzgo con una perspectiva de género en el caso, ello por ser incorrecto el desechamiento decretado por la Comisión, pues al hacerlo, se incurrió en una denegación de justicia.

¹³ Criterio que también ha sido sostenido por este Tribunal Electoral al resolver los asuntos con clave: TEEP-JDC-228/2021, TEEP-JDC-60/2021, TEEP-JDC-73/2021, TEEP-JDC-212/2021 y TEEP-JDC-73/2022.

En consecuencia, lo procedente es **revocar** la resolución impugnada para que, **la Comisión Responsable admita de inmediato la queja presentadas y realice la investigación** respecto a la conducta denunciada en el procedimiento especial sancionador SE/PES/MSR/033/2022; y de ser el caso, **ponderar si pudiera existir alguna acumulación con otro expediente de los que tiene radicados**; lo anterior en el término establecido en el artículo 406 del CIPEEP, **debiendo remitir las constancias derivadas de la investigación, enseguida de que ésta concluya y sin mayor dilación.**

Finalmente, no pasa desapercibida la manifestación de la actora, respecto a su solicitud de medidas cautelares y de protección, sin embargo, al resultar fundados los agravios antes referidos es que, este Tribunal considera que tal alegación no opera, pues la autoridad administrativa, en su momento deberá emitir el pronunciamiento respectivo con base en lo establecido en los artículos 413 y 416 del CIPEEP.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1 fracciones V y VII, 3, 8, 325, 338 fracciones I y III, 340 fracción II, 348 fracción II, 353, Bis, 354 párrafo segundo del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla se

RESUELVE:

ÚNICO. Se declaran **FUNDADOS** los agravios estudiados en el considerando QUINTO de este fallo y, en consecuencia, se **REVOCA** la resolución impugnada para los efectos precisados en el mismo.

NOTIFÍQUESE, en términos de Ley, de lo establecido en el Acuerdo General 06/2020 del Pleno de este Tribunal, y de la



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE PUEBLA

jurisprudencia 4/2021, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Así lo resolvieron y firmaron en esta fecha, por **unanimidad** de votos y en sesión pública las Magistradas y el Magistrado en Funciones del Tribunal Electoral del Estado ante la Secretaria General de Acuerdos en Funciones que autoriza y da fe.

MAGISTRADA PRESIDENTA


IDAMIS PASTOR BETANCOURT


MAGISTRADO
EN FUNCIONES
ISRAEL ARGÜELLO BOY


MAGISTRADA
NORMA ANGÉLICA
SANDOVAL SÁNCHEZ

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS EN FUNCIONES



IRMA JOSEFINA MONTIEL RODRIGUEZ

